¿Hacia un cambio político en el Magreb?

Rémy Leveau

Dos acontecimientos mayores, independientes uno del otro, crearon en 1999 un cambio de perspectivas en las relaciones entre los tres países del Magreb: Marruecos, Argelia y Túnez, y también en la percepción que el mundo tiene de ellos. Por un lado, el ascenso a la presidencia de la república argelina de Abdelaziz Buteflika, y por el otro la llegada al trono de Mohamed VI, después de la muerte de su padre, el rey Hasan II. Si bien dichos cambios no han producido aún todas sus consecuencias en la dinámica interna y externa, hacen sin embargo resaltar la estabilidad tunecina como aquejada de esclerosis. No es nada seguro predecir que la interacción de ambos provocará, como parecen desearlo los principales protagonistas, un descenso de la tensión en el Magreb. Podría ocurrir todo lo contrario si la dinámica incontrolada de los nacionalismos sigue siendo tan necesaria a la lógica arquitectónica de naciones que lograron erigir Estados sobre los escombros del sistema colonial. Todo dependerá de la manera en que se administren las relaciones entre islamistas y militares, los cuales forman el campo de fuerzas fundamentales de los sistemas políticos de esos países.

LOS FACTORES DE CAMBIO

Más allá de los esquemas clásicos a la región cultural árabe-musulmana, estas oposiciones expresan tensiones profundas, rivalidades entre élites y contra las élites, ligadas a cambios económicos y sociales que no logran traducirse en

Traducción del francés: Jean Meyer.

compromisos políticos durables. Los factores imprevisibles, como la muerte del rey Hasan, el alza del precio del barril de petróleo hasta los 35 dólares, no pueden ser controlados por los dirigentes; cuando mucho pueden anticiparlos, aunque más bien les toca adaptarse, esto aunado al riesgo de sufrir trastornos graves en las relaciones clientelistas que sostienen cierto tipo de equilibrios.

Así, la muerte del rey de Marruecos era tan previsible como incierta y las élites políticas habían enfrentado el riesgo de una sucesión azarosa al favorecer la constitución de un gobierno de alternancia, tras las elecciones de noviembre de 1997, como no quisieron hacerlo en 1993 y 1996. Sin embargo, la integración de la izquierda al poder deja el campo libre a los islamistas para presentarse como la única oposición. La monarquía parece mal armada y dubitativa frente a las demandas y a las críticas que despiertan mucho eco en un amplio sector social, lo que podría hipotecar toda apertura democrática ulterior. El compromiso político concertado entre el joven monarca y los partidos que representan a la clase media urbana dejaría entonces lugar a un enfrentamiento entre islamistas y militares que marginaría a la monarquía. Hipótesis que nos lleva al caso argelino, en el cual las élites militares que supieron vencer a los islamistas no han logrado, o no han buscado debido a sus divergencias, soluciones políticas que les permitan encontrar una salida al conflicto. Visto de otra manera, podría sugerirse que la persistencia de un conflicto de baja intensidad les da los medios políticos para mantener un control autoritario sobre la sociedad, mientras que el alto precio del barril de petróleo les da los recursos económicos que vuelven innecesaria cualquier apertura negociada, a la vez que los protege de cualquier intrusión en forma de condiciones políticas dictadas desde fuera en el momento preciso en que privilegian la apertura económica. Así, esa oportunidad les permite pensar en una política de privatización que incluiría la apertura al capital extranjero de la SONATRACH, la paraestatal del petróleo y del gas, con el fin de conseguir los capitales y la tecnología necesaria para mantener por mucho tiempo la renta petrolera a un buen nivel. Con esa apuesta, Argelia se sitúa en una perspectiva de inserción en una economía mundializada bajo un esquema que reserva a los Estados Unidos el papel de principal socio, mientras que relega a Europa a un plano complementario. De este modo Argelia adquiere una autonomía mayor que la de sus dos vecinos magrebinos que siguen atados por múltiples lazos económicos y culturales a una Europa capaz de exigirles condiciones políticas. Pero mantener tanta presión autoritaria sobre la sociedad argelina bien podría ser hoy algo poco razonable, capaz de poner fin al consenso entre los militares y las élites civiles.

El caso tunecino no evade esa lógica: el eje central del régimen es, una vez más, la oposición entre un sistema represivo (en este caso esencialmente policiaco) y los islamistas. Los ejemplos argelino y libio, sumados a su proximidad inmediata, han llevado el régimen a endurecerse a principios de los años noventa y a domesticar a una clase media urbana asustada por sus vecinos. Una distribución bastante amplia de la prosperidad, asegurada por una economía que combina recursos diversos, ha contribuido a estabilizar la situación y a calmar a una sociedad civil, la cual, en el pasado, no había tolerado con igual paciencia el autoritarismo del presidente Burguiba. Dejemos a un lado la imprevisible posibilidad de un radical cambio interno: el cambio en Túnez podría ser el resultado de una evolución externa, de disímiles factores. El primero de éstos podría ser la liberalización en Argelia, lo cual tendría el efecto inverso de la réplica de 1988-1990 que llevó Túnez a endurecer sus relaciones con los islamistas para protegerse del contagio argelino. El segundo factor podría resultar de un cambio en las relaciones económicas, provocado por una apertura mal llevada de la economía tunecina en el marco del proceso de Barcelona.¹ El tercer factor que hace sentir ya sus efectos podría ser un cuestionamiento externo del autoritarismo del régimen y sus violaciones a los derechos del hombre. Hasta ahora se ha beneficiado de una tolerancia por parte de los Estados Unidos y de Europa, que bien podría cesar en cualquier momento, lo que provocaría una pérdida tanto de recursos como de legitimidad.

La muerte de Burguiba, en abril del año 2000, sacó a la luz las tensiones internas y los límites del sistema. La mezquina gestión de los funerales de quien había sido el Combatiente Supremo, el héroe de la independencia, no sirvió a la causa del presidente Ben Alí; el fracaso del intento de recuperación aumentó el malestar, la nostalgia, las frustraciones. Afuera la complicidad con el régi-

¹ En 1995 tuvo lugar en Barcelona la primera cumbre entre la Unión Europea y varios países del Mediterráneo. [N. del T.]

men bien podría menguar y el regreso al escenario regional del coronel libio Khadafi (cumbre euro-africana de El Cairo en abril 2000) podría ser amenazador. Ben Alí, con sus 9 mil millones de renta petrolera, no debería tardar en usar esos recursos para reencontrar un papel a la escala continental. En tal caso chocaría con Túnez, que aspira a ser el buen alumno del FMI y del proceso de Barcelona. De modo que la línea de Ben Alí puede verse desafiada justo en el momento en que empezaría a perder sus apoyos externos.

Es claro que varios factores de cambio están afectando al Magreb y su combinación puede engendrar apertura económica y/o liberalización política, sin que la relación entre ambos fenómenos sea determinante. Por lo pronto, les es más fácil a las élites dirigentes encontrar los compromisos necesarios para una política de privatización económica y de desmantelamiento del Estado, que para su democratización. Sin embargo, a mediano y largo plazo la democratización parece inevitable si se toma en cuenta la evolución de las sociedades.

¿HACIA NUEVOS COMPROMISOS ENTRE LAS ÉLITES?

¿Cómo interpretar los cambios y las recomposiciones recién ocurridas? Una interpretación en el marco cronológico del último año sería tan engañosa como decepcionante. Es indispensable tomar en cuenta por lo menos los grandes acontecimientos de los últimos diez años para poder calificar la acción de los nuevos dirigentes. ¿Se identificarán o intentarán influir en los conflictos de élite que siguen resumiendo el juego político en el Magreb? Aunque haya disminuido el riesgo de un ascenso al poder de los islamistas radicales, la cuestión del islam seguirá por mucho tiempo siendo la médula del proceso de legitimación, de construcción nacional y hasta de regulación de la sociedad civil. No será siempre la variable dominante de los compromisos y de los pactos necesarios para integrar los nuevos actores, hijos de una clase media en expansión a consecuencia de la urbanización y del crecimiento natural del sistema educativo.

En ese juego de influencias por el control del acceso a los recursos que dependen de los Estados, las identidades regionales tienen más posibilidades de rivalizar con los movimientos islamistas que las agrupaciones en forma de partidos, sindicatos o clases sociales. De hecho, el empleo de dichas solidaridades por las élites y las contraélites constituye hoy en día la fuerza principal en el campo político. Pero, por razones diferentes, tanto la religión como las solidaridades regionales no aparecen como legítimas a las élites modernizadoras que siguen usando un discurso marcado por el nacionalismo árabe o el marxismo, discurso armado al día siguiente de las independencias.

En tal contexto, la tentación de acercarse al ejército, capaz de compartir parcialmente el simbolismo modernista y nacionalista, es más fuerte que la eventual búsqueda que pretende integrar al sistema político trujimanes islamistas que se presentan como mediadores para la nueva sociedad de masas, deseosos de ocupar el vacío dejado por la cooptación de la izquierda. En una primera etapa, los islamistas aspiran a monopolizar el poder conquistado bien por la fuerza o por el voto. Sus fracasos al enfrentar los aparatos estatales en Argelia y Túnez pueden llevar hoy a buena parte de sus élites a contentarse con una participación consensada; pero no están dispuestos a confiarse al arbitrio del poder instaurado y a la precariedad de compromisos efímeros dañados por las múltiples disputas surgidas en los conflictos con el poder desde los ochenta.

Una hipótesis válida sería pensar que hoy en nuestros tres países los islamistas representan movimientos sociales en búsqueda de institucionalización, lo cual limitaría normalmente su capacidad de movilización y sus posibilidades de lograr la conquista total del poder. A la vez, eso les aseguraría un papel en la integración de la población urbana desfavorecida, las nuevas clases peligrosas que infunden temor a las burguesías de Estado que tomaron el poder tras la independencia.

Así los islamistas se librarían de la arbitrariedad del poder para entrar en un juego político competitivo en el cual se les reconocería un papel fundamental, siempre y cuando aceptasen, a cambio, legitimizar los despotismos ilustrados. Esa forma de sabiduría podría ser la consecuencia de los enfrentamientos de los diez últimos años, de la constatación de que ninguna revolución religiosa ha logrado la victoria, empezando por la revolución iraní.

De manera indirecta esta evolución puede haber sido influida por el derrumbe soviético, y de la subsecuente toma de conciencia de que es inevitable asociarse al mercado mundial: para acceder a él se deben aceptar sus reglas y normas. Eso no impedirá que subsista el clamor del discurso milenarista que coexistirá con el respeto a las reglas, muy lejos de las antiguas prácticas del tercermundismo, del no alineamiento, de las nacionalizaciones al estilo Mossadegh, Nasser o Bumedien.

En esa perspectiva de búsqueda de un compromiso democrático soñado hoy por las élites de los movimientos islamistas, Argelia es quizá el país clave. Sus élites militares, más que las de Marruecos, buscan a alguien que les permita conservar el control efectivo del poder sin tener que asumir durante más tiempo la gestión del conflicto que costaría la destrucción de la sociedad. ¿Estarán dispuestos a pagar el precio en forma de una integración parcial de los dirigentes islamistas, como contraparte a una represión de menor intensidad?

La islamización de la sociedad por el Estado está muy adelantada y por lo tanto el costo colectivo podría ser aceptable. El régimen tunecino se ha limitado a prolongar el modelo Burguiba, apoyándose en un aparato represivo estatal, con la complicidad del ejército en los momentos cruciales. Pero la domesticación voluntaria de la clase media descansa sobre una base económica; los cambios podrían venir de fuera, y también de una evolución interna que haría aparecer al autoritarismo como inaceptable por inútil.

El caso marroquí había sido hasta ahora una excepción en gran parte gracias al talento de Hasan II y de su gobierno, más que al carácter religioso de la monarquía. La coronación de Mohamed VI consolida la institución monárquica, pero a la vez le quita fuerza ligada a la experiencia de un soberano con largos años de reinado. La monarquía puede vivir un tiempo sobre ese capital histórico, pero a la postre no sabrá arbitrar entre las tensiones que pueden renacer con la entrada de los islamistas a un campo político que una izquierda cooptada ha abandonado; ahora bien, el fortalecimiento de los militares, requeridos inicialmente para desmantelar el sistema de poder anterior y su aparato represivo, puede comprometer la capacidad arbitral del rey. Su movilización tendrá un costo interno si el país retoma la tradición de motines urbanos. Los militares no están dispuestos a favorecer la solución del conflicto en el Sahara Occidental que Argelia bien puede conservar como medio para presionar sobre un Marruecos ya no tan capaz de asumir el conflicto a bajo costo.

Lo cierto es que no se puede pensar en una apertura democrática en el Magreb sin considerar el papel de los islamistas en dicha apertura. Excluirlos sig-

nificaría violencia y perversión autoritaria del juego político, lo que situaría a los militares en la posición de árbitro, con el apoyo pasivo o temeroso de gran parte de la clase media urbana y con un amplio consenso internacional.

Para evitar las réplicas autoritarias que podrían surgir como reacción a un progreso electoral del islamismo, se deben lograr pactos abiertos o tácitos con la contraélite de los movimientos islamistas, con el fin de definir reglas del juego que no conduzcan a la eliminación definitiva de uno de los actores, trátese del que controla la violencia, de los que pueden asegurar la legitimación del poder (o a la inversa), de las élites modernizadoras del aparato estatal o bien del sector privado, que aseguran la marcha de la economía y el equilibrio social. Eso supone la existencia de valores e intereses comunes suficientemente fuertes entre las élites y las contraélites para que el compromiso valga la pena. Hoy en día ningún actor cuestiona el marco estatal y los principios básicos de una apertura económica. La herencia del nacionalismo árabe puede reciclarse para formar un nuevo discurso unitario que deje su lugar a un islam de Estado. Las rivalidades entre naciones vecinas pueden servir para consolidar externamente compromisos que conduzcan a ciertas aperturas liberales, como de manera imperfecta lo demuestran la evolución del Marruecos de Hasan II en los diez últimos años: cierta inteligencia técnica, hasta electoral, puede ser parte del juego si los jugadores aceptan sus reglas, al menos como una etapa hacía una apertura mayor. El ejemplo contrario han sido las elecciones argelinas de diciembre de 1991 que, al otorgar un triunfo desmedido al Frente Islámico, provocaron la intervención del ejército.

Esas experiencias abastecieron los diversos actores con una reserva de miedos y representaciones imaginarias que pueden seguir usando, legitimizando un *statu quo* que marginará cada día más a sus países. Sin embargo, actuando al revés, podrían intentar desbloquear la situación. Los factores externos, la salida de acuerdos bilaterales marcados por la herencia colonial y postcolonial, el juego de las organizaciones regionales e internacionales (UE, FMI, OTAN, ONU, ONG diversas) han modificado las situaciones que llevaron, en 1994-1995, a un consenso sobre la necesidad de parar en seco al islamismo radical y de otorgar a los gobiernos antiislamistas una renta estratégica. No se puede esperar la desaparición de esa tendencia pero su matización está ocurriendo.

La evolución regional del juego de fuerzas internacionales ha contribuido a introducir progresivamente a los Estados Unidos como actor y árbitro. Lo que, automáticamente, no produce una apertura mayor, puesto que el compromiso americano sigue siendo marginal. Pero puede justificar el cuestionamiento de formas excesivas de autoritarismo y de clientelismo. El problema existe cuando vemos a Libia salir de su aislamiento y situarse en el centro de los nuevos envites petroleros mundiales. El gobierno tunecino de Ben Alí podría pagar el costo de la reevaluación americana de sus apoyos y rentas estratégicos, lo que serviría de ejemplo para los demás actores.

En tal perspectiva, el Magreb tendría mejores posibilidades de lograr un buen trato si fuese capaz de reducir sus conflictos internos y mantenerse unido. Como está menos implicado en conflictos regionales capaces de incendiar el planeta que Egipto, no puede soñar con obtener rentas estratégicas del tipo de las que El Cairo ganó a largo plazo por su participación en los acuerdos de Campo David.

El Magreb aún no logra movilizar las solidaridades que deberían ser consecuencia lógica de sus tan numerosos migrantes en Europa occidental. Para obtenerlas deberá entrar primero en un proceso que no contradiga las representaciones y las estrategias de los migrantes en sus relaciones con Europa.

Europa forma un amplio espacio regional susceptible de revisar su posición actual de cierre migratorio. Tal cambio daría a los jóvenes la esperanza y los recursos, pero la evolución en ambas riberas del Mediterráneo estaría marcada por las herencias bilaterales conflictivas.

La posición del Magreb en el mundo mediterráneo no es la mejor para movilizar recursos que ayuden a su modernización. No tiene vocación para entrar a la Unión Europea, como una Turquía que se ha hecho notar por su reciente acercamiento a Grecia o por su papel estabilizador en los Balcanes. Además, quienes captan las mayores rentas estratégicas son los países implicados directa o indirectamente en el conflicto árabe-israelí. Al Magreb le queda cierta capacidad para hacer funcionar estados relativamente viables, a manejar conflictos internos y externos de importancia mediana y a movilizar solidaridades externas más ligadas a la inmigración en Europa que a la diabolización del islamismo radical y la explotación de los miedos que engendra. ¿Sabrán los nue-



vos líderes que llegaron al poder en 1999 estabilizar sus países y reconstruir un orden regional que refuerce su capacidad de negociar, comparada a la de los otros conjuntos mediterráneos? Si no lo logran en un plazo razonable, la situación del Magreb podría volverse tan desesperante como la de muchos países de África occidental.